

Sentencia definitiva

RIT: T-1968-2019

RUC: 19-4-0233349-1

_____/

Santiago, veintiocho de diciembre de dos mil veinte.

VISTO:

Denuncia de tutela. Compareció doña **MARITZA VERONICA CACERES ROMERO**, cédula de identidad N° 12.495.990-K, cesante, domiciliada en Pasaje Cali N° 6523, comuna de Peñalolén, ciudad de Santiago, quien en lo principal interpuso denuncia en procedimiento especial de acción de tutela laboral, por vulneración de garantía de indemnidad, en contra de su ex empleadora **ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA**, rol único tributario N° 76.134.941-4, representada legalmente por don Manuel López Barranco, rol único tributario N° 7.014.100-0, ambos con domicilio en Avenida Eduardo Frei Montalva N° 8301, comuna de Quilicura.

Solicita que, en definitiva, se declare que los hechos denunciados constituyen una infracción a la garantía de indemnidad, se acoja la denuncia y en definitiva se condene a la denunciada al pago de las siguientes prestaciones:

1. El recargo del 30% de la indemnización por años de servicios: \$1.354.533;

2. Condenar adicionalmente a la denunciada a una indemnización especial equivalente a once meses de la última remuneración mensual del trabajador, de conformidad al artículo 489 número 3 del Código del Trabajo por la suma de \$6.208.059, o las sumas que el Tribunal estime conforme a derecho condenar, de conformidad a la norma legal antes citada.

3. El reintegro de los descuentos que de forma abusiva e ilegal realizó con ocasión del pago del finiquito de fecha 11 de octubre de 2019:

a. Aporte de seguro de cesantía por \$910.594;

b. Préstamo especial por \$916.251; y

c. Préstamo abril por \$24.000.

4. Que, ejecutoriada la sentencia, se remita copia de esta a la Dirección del Trabajo, para ser incluida en la nómina de empresas condenadas por prácticas antisindicales e infracción a los derechos fundamentales del trabajador, artículo 4 de la Ley 19.886 y artículo 495 inciso final del Código del Trabajo;

5. Las costas personales de este procedimiento.

Expone que con fecha 11 de abril del año 2011, comenzó a cumplir - bajo subordinación y dependencia - funciones de vendedora comisionista de 45 horas a la semana, desempeñándose en no más de 6 ni menos de 5 días a la semana, incluidos domingos y festivos, en las dependencias del Hipermercado Líder Quilín, ubicadas en Avenida Américo Vespucio N° 3100, comuna de Peñalolén.

Las últimas remuneraciones percibidas ascendían a la suma de \$564.389.



Señala que el 27 de septiembre de 2019, recibió de la Gerente de Ventas, Sra. Magdalena Edith Saavedra Garrido, carta de aviso de término de contrato de trabajo, basado en el artículo 161 inciso primero del Código del Trabajo.

Refiere que con fecha 16 de septiembre de 2019, en la audiencia preparatoria por denuncia de vulneración de derechos fundamentales, la parte denunciante en la causa RIT T-1303-2019 seguida ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo, la ofreció como testigo, según consta en el Acta de Audiencia Preparatoria en Procedimiento de Tutela de fecha 16 de septiembre de 2019. Alega que el despido de que fue objeto el día 27 de septiembre de 2019, ha constituido sin duda alguna, una vulneración de la garantía de indemnidad.

Expresa que trabajó por más de 8 años para su ex empleadora, en 2 hipermercados, con muchísimos Gerentes de Venta, siendo siempre reconocida y valorada, tanto por sus jefes, compañeros y clientes de Líder, por su trato afable y cordial, siempre con buena disposición al servicio de cara al cliente. Nunca fue objeto de medida disciplinaria alguna. Pero, desde que la empresa tomó conocimiento de que sería testigo en una causa laboral de tutela por vulneración de derechos fundamentales, su situación cambió, recibió reproches y amenazas de despido, hasta que este se materializó con fecha 27 de septiembre.

Alega que el injusto e ilegítimo accionar de la Administradora de Supermercados Híper Limitada, ha dado cabal cumplimiento con el presupuesto establecido en el artículo 485, inciso tercero del Código del Trabajo, el que exige como segundo elemento - “la represalia - sea consecuencia del ejercicio de acciones judiciales, por su participación en ellas como testigo o haber sido ofrecidos en tal calidad”.

Afirma que su ex empleadora, la Administradora de Supermercados Híper Limitada (Walmart - Líder) de forma ilegítima e irrevocablemente le provoca un daño al despedirla, por el solo hecho de haber ejercido legítimamente un derecho, producto de una aspiración de justicia; y por otro lado, el empleador ejerce en este caso sus potestades sin causa o razón, siendo la represalia ejercida únicamente por razonamientos de carácter subjetivo, emocionales o de venganza.

Respecto de la vulneración a la garantía de indemnidad alegada por su parte, concluye que ha acreditado el indicio que da cuenta de dicha vulneración. En efecto, la sola correlación temporal entre el hecho de haber sido ofrecida como testigo en la audiencia preparatoria celebrada el día 16 de septiembre ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo, en la causa RIT T-1303-2019, y el despido que le fuera informado por la Gerente de Ventas, Sra. Magdalena Saavedra Garrido, quien le comunicó la decisión de poner término a su contrato de trabajo por necesidades de la empresa, artículo 161 N° 1 del Código del Trabajo, con fecha 27 del mismo mes.

Señala que de los hechos expresados y de los antecedentes de autos, se puede colegir inequívocamente que el acto del despido realizado por su ex empleadora, no tiene otra finalidad que la de servir de represalia por ser ofrecida



como testigo en juicio, además de inhibir o coartar que otros trabajadores de la Administradora de Supermercados Híper Limitada, sirvan como testigos en procesos judiciales a riesgo de ser despedidos por necesidades de la empresa, por atreverse a declarar una verdad cierta pero incómoda para su ex empleadora, la mejor prueba de ello, es que a pesar de contar con testigos presenciales de como fue acosada en cuanto se supo que declararía por la parte denunciante; ninguna de ellas estuvo disponible para deponer por su parte, situación que no comparte pero entiende, ante tanta necesidad de trabajo y el riesgo que significa contrariar al empleador y/o a sus jefaturas.

Sostiene que en su caso los indicios son:

a. Contrato de trabajo de fecha 11 de abril del año 2011, fecha en que ingresó a la Administradora de Supermercados Hiper Limitada, para prestar servicios como vendedora comisionista de 45 horas semanales;

b. Carta terminación de contrato de trabajo, artículo 161 N° 1 del Código del Trabajo de fecha 27 de septiembre de 2019;

c. Finiquito suscrito por la Administradora de Supermercados Hiper Limitada, que pone término a la relación laboral de fecha 11 de octubre de 2019,

d. Acta de Audiencia Preparatoria de fecha 16 de septiembre de 2019, donde consta que será citada como testigo en la causa RIT T-1303-2019 del Primer Juzgado de Letras de Santiago.

Demanda subsidiaria: en el primer otrosí de su libelo y de manera subsidiaria, la compareciente interpuso demanda por despido improcedente y cobro de prestaciones e indemnizaciones, en contra **ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA**, rol único tributario N° 76.134.941-4, representada legalmente por don Manuel López Barranco, rol único tributario N° 7.014.100-0, ambos con domicilio en Avenida Eduardo Frei Montalva N° 8301, comuna de Quilicura.

Solicita que, en definitiva, se declare que el despido de fecha 27 de septiembre ha sido improcedente, y se condene a la denunciada al pago de las siguientes prestaciones:

1. El recargo del 30% de la indemnización por años de servicios: \$1.354.533;

2. El reintegro de los descuentos que de forma abusiva e ilegal realizó con ocasión del pago del finiquito de fecha 11 de octubre de 2019:

a. Aporte de seguro de cesantía por \$910.594;

b. Préstamo especial por \$916.251; y

c. Préstamo abril por \$24.000.

3. Las costas personales de este procedimiento.

En cuanto a los fundamentos de la demandada subsidiaria, reproduce los expresados en lo principal y en lo atinente al despido improcedente reproduce el tenor de la comunicación y alega que el hecho fundante, no solo es impreciso y vago, no puede estimarse como un hecho que efectivamente funde la causal.



En relación al cobro de prestaciones, alega la devolución de descuento por Seguro de Cesantía por la suma de \$910.594, monto que le fuera descontado en el finiquito de fecha 18 de octubre de 2019.

Indica que con fecha 11 de octubre de 2019, al momento de suscribir el finiquito formuló reserva de derechos para reclamar en sede judicial los cobros de 2 préstamos sociales que había suscrito con su ex empleadora, los cuales se habían pactado en cuotas mensuales, que de manera arbitraria y contraria a derecho, le fueron descontados de su finiquito. Sostiene que si un trabajador al término de la relación laboral mantiene vigente una deuda por crédito social, para poder efectuarse el descuento de dicha deuda de las indemnizaciones que le pudieren corresponder por el término de su contrato de trabajo deberá, al momento de ratificar el finiquito, autorizar expresamente cualquier descuento destinado al pago de tales obligaciones crediticias. De esta forma, la Administradora de Supermercados Híper Limitada, apartándose de lo resuelto por la Dirección del Trabajo, ha acelerado arbitrariamente ambos créditos, haciendo exigible los saldos insolutos de cada obligación, como si fuera de plazo vencido, a pesar de que estaban al día; contraviniendo además lo dispuesto en los artículos 1545 y 1546 del Código Civil, por lo que, corresponde le sean reintegrados en su totalidad, ya que se trata de un abuso de su ex empleador, quien arbitrariamente realizó descuentos en su finiquito, los que ciertamente estaba impedido de hacer.

Contestación de las demandas. Compareció don Christian Fox Igualt, abogado, domiciliado para estos efectos en Avenida Nueva Tajamar N° 555, oficina 201, comuna de Las Condes, en representación de la demandada ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA, persona jurídica del giro de su denominación, del mismo domicilio del compareciente, solicitando tener por contestadas las demandas y, en definitiva, desestimar las demandas de tutela y de despido injustificado e improcedente y cobro de prestaciones. Subsidiariamente, para el remoto evento que se estime que la demanda es procedente, solicita que, en todo caso, se condene a su representada sólo por aquellos rubros y/o montos que resulten efectivamente acreditados en el proceso. En cualquier evento, que se condene en costas a la demandante y, además, se exima a su parte del pago de las costas, por no haber sido totalmente vencida y/o por haber tenido motivos más que plausibles para litigar.

1. En cuanto a la demanda de tutela por presunta vulneración derechos fundamentales y cobro de prestaciones laborales, sostiene la inexistencia de supuestos actos vulneratorios con ocasión del despido:

En primer término, niega de forma absoluta la existencia de hechos o actos que hayan implicado la vulneración de derechos fundamentales de la demandante, ya sea durante la relación laboral o con ocasión del despido.

Señala que es efectivo que la demandante fue despedida por la causal necesidades de la empresa. También es efectivo, tal como consta en acta de audiencia preparatoria, que la demandante fue ofrecida como testigo con fecha 16



de septiembre de 2019, en causa RIT T-1303-2019, seguida ante el Primer Juzgado del Trabajo de Santiago. Causa en la que su representada es parte demandada.

Alega la procedencia del descuento del aporte del empleador al seguro de cesantía, citando el fallo Rol N° 23.348-2018, pronunciado por la Cuarta Sala de la Excelentísima Corte Suprema en su considerando Noveno.

En cuanto a los préstamos, indica que no procede realizar ninguna devolución ya que los descuentos fueron debidamente hechos.

Respecto a los hechos que constituirían la vulneración de sus derechos fundamentales con ocasión del término de la relación laboral, indica que el despido no tiene como motivación ninguna represalia de parte de la empresa, la cual sólo tomó conocimiento con fecha 2 de octubre de 2019 que la demandante había sido ofrecida como testigo, tal como consta del correo enviado por la abogada externa, Karin Rosenberg Dupré, quien informó con esa fecha el primer nombre y apellido de los testigos ofrecidos, y preguntó si alguno de ellos prestaba o prestó servicios para la empresa. Lo anterior deja en evidencia que es imposible que la demandante haya sido despedida como resultado de haber sido ofrecida como testigo, ya que la empresa solo tomó conocimiento de forma posterior. Agrega que no basta la cercanía o proximidad de los eventos, como sería en este caso el ser ofrecida como testigo, y ser despedida, sino que debe acreditarse que el despido es efectivamente una represalia por haber sido ofrecida como tal, es decir, debe probarse el nexo entre ambos sucesos, y específicamente que el segundo es consecuencia del primero.

Señala que no es real que la demandante haya recibido reproches o amenazas de despido, y hace énfasis en que lo señalado por la actora resulta imposible, por cuanto la empresa solo tomó conocimiento que la misma había sido ofrecida como testigo días después de haberla desvinculado. Hace presente que el necesario vínculo de causalidad es reconocido como elemento de la garantía de indemnidad en la propia demanda, debiendo hacerse cargo del mismo y acreditarlo la parte demandante. Es así como indica que los propios requisitos señalados en la demanda no se cumplen en este caso, esto es conocimiento del empleador, relación causa-efecto.

Expresa que extraño resulta que en la demanda no se mencione en ningún momento de qué forma la empresa habría tomado conocimiento de su participación en la nómina de testigos en la causa seguida ante el Primer Juzgado del Trabajo, ni quienes la habrían amenazado, o reprochado dicha participación, como tampoco menciona ningún nombre de aquellos supuestos testigos de presuntos actos de acoso, no existiendo ningún indicio concreto en la demanda de esta supuesta vulneración.

Alega la improcedencia de las pretensiones contenidas en la demanda de Tutela.



2. En cuanto a la demanda subsidiaria, de pretendido despido injustificado y cobro de prestaciones laborales, afirma la procedencia de la causal regulada en el artículo 161 inciso 1° del Código del Trabajo pues el despido se encuentra del todo justificado en los hechos, existiendo precisamente un proceso de racionalización de los costos de la mano de obra en el local en el cual se desempeñaba la demandante. En definitiva el despido se encuentra plenamente justificado, debiendo rechazar la demanda en su totalidad.

En cuanto a las pretensiones contenidas en la demanda de despido injustificado, sostiene la improcedencia y el rechazo de las mismas.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Audiencia preparatoria. Llamado a conciliación. Hechos no controvertidos. Hechos controvertidos. Que en la audiencia preparatoria se verificaron los siguientes trámites procesales:

Llamado a conciliación: resultó frustrado.

Hechos no controvertidos:

1) La existencia de una relación laboral desde el día 11 de abril del año 2011, como vendedora comisionista.

2) Que la remuneración para efecto de cálculo de prestaciones es de \$564.389.

3) Que el término de la relación laboral se produce el 27 de septiembre de 2019 por la causal de necesidades de la empresa, artículo 161 del Código del Trabajo.

4) Efectividad de existir la causa RIT T-1303-2019, tramitada ante el 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, donde la demandante es ofrecida como testigo en cuya causa la denunciada presenta la calidad de demandada.

Hechos controvertidos:

1) Efectividad de haber ocurrido el despido vulneratorio de la garantía de indemnidad. Hechos y circunstancias.

2) Efectividad de los hechos contenidos en la carta de despido.

3) Efectividad de ser procedente el descuento por el aporte del empleador al seguro de cesantía.

4) Prestaciones adeudadas. Fundamento y monto.

5) Procedencias de descuentos efectuados al momento del término de la relación laboral por parte del empleador. Hechos y circunstancias.

SEGUNDO. Medios de prueba de la demandante. Que para acreditar sus pretensiones, la demandante incorporó los siguientes medios de prueba:

Documental

1) Acta de Audiencia Preparatoria, causa RIT T-1303-2019.

2) Impresión de la página web de El Mostrador, por la inauguración del centro de distribución El Peñón de Walmart.

3) Impresión de la página web de Emol, economía y negocios, también por la inauguración del Centro de Distribución El Peñón.

4) Impresión de la página web de Walmartchile.cl, donde inaugura el primer centro de distribución omnicanal en Chile.

Confesional

Declaró doña Magdalena Edith Saavedra Garrido, cédula de identidad N° 13.537.567-5, gerente de ventas.

Testimonial

Prestaron declaración, previo juramento o promesa de decir verdad, los siguientes testigos:

1) Jenniffer Helen Rodríguez Rodríguez, cédula de identidad N° 14.180.607-6.

2) Juana Ximena Ramírez Cid, cédula de identidad N° 12.659.430-5.

Exhibición de documentos

a) La demandada exhibe a la demandante las *evaluaciones de desempeño de la demandante por los periodos 2017-2018 y 2018-2019*, solicitados en la audiencia preparatoria.

b) La demandada no exhibe a la demandante los siguientes documentos solicitados en la audiencia preparatoria: *1) Estado de Resultados (ROP) del Hipermercado Quilín, de los meses de septiembre 2018 a septiembre de 2019; 2) Estado de Resultados (ROP) de la sección de Electro, también denominada Entretenimiento del Hipermercado Quilín, de los meses de septiembre de 2018 a septiembre de 2019*. La demandante solicita se haga efectivo el apercibimiento legal respectivo y previo traslado conferido, el Tribunal deja su resolución para definitiva.

TERCERO. Medios de prueba de la demandada. Que la demandada incorporó los siguientes medios de prueba:

Documental

1) Copia de liquidaciones de sueldo de Jennifer Rodríguez Rodríguez de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019.

2) Copia de correos electrónicos enviados desde el 12 de agosto de 2019 por la casilla krosenberg@tomasello.cl con el asunto “solicita información causa RIT-1303-2019 del 1° Juzgado del Trabajo de Santiago”, hasta el 2 de octubre de 2019, fecha en que asunto es “Audiencia Preparatoria causa RIT T-1303-2019 del 1° Juzgado del Trabajo de Santiago”, con correspondientes respuestas.

3) Copia de 10 finiquitos de contrato de trabajo, correspondientes de fecha 12 de septiembre de 2019, 7 finiquitos de fecha 11 de octubre de 2019, 1 finiquito de fecha 30 de octubre de 2019, y 1 finiquito de fecha 5 de noviembre de 2019, todos por la causal necesidades de la empresa.

4) Copia de autorización de descuento préstamo de fecha 2 de septiembre de 2019, firmado por la demandante.

5) Copia de certificados de saldo aporte empleador al seguro de cesantía de fecha 26 de septiembre de 2019.

Confesional



Quedó constancia del desistimiento de este medio de prueba.

Testimonial

Prestaron declaración, previo juramento o promesa de decir verdad, los siguientes testigos:

- 1) Jimena del Pilar Martínez Muñoz, cédula de identidad N° 10.083.942-3.
- 2) Yamilet Andrea Montoya Cuevas, cédula de identidad N° 15.211.801-5.
- 3) Karin Ingrid Rosenberg Dupré, cédula de identidad N° 16.143.061-7.

CUARTO: Efectividad de haber ocurrido el despido vulneratorio de la garantía de indemnidad. Hechos y circunstancias. Que la demandante solicita que se declare que su despido ha constituido una vulneración de la garantía de indemnidad.

El inciso tercero del artículo 485 del Código del Trabajo dispone que *“Se entenderá que los derechos y garantías a que se refieren los incisos anteriores resultan lesionados cuando el ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al empleador limita el pleno ejercicio de aquéllas sin justificación suficiente, en forma arbitraria o desproporcionada, o sin respeto a su contenido esencial. En igual sentido se entenderán las represalias ejercidas en contra de trabajadores por el ejercicio de acciones judiciales, por su participación en ellas como testigo o haber sido ofrecidos en tal calidad, o bien como consecuencia de la labor fiscalizadora de la Dirección del Trabajo”*. Establecida la fuente legal de la garantía a la indemnidad, se puede constatar la concurrencia de los elementos para su análisis: a) el ejercicio de acciones judiciales por parte de un trabajador, de manera directa o por su participación en ellas como testigo o haber sido ofrecidos en tal calidad, o bien como consecuencia de la labor fiscalizadora de la Dirección del Trabajo, b) una represalia por parte del empleador y c) la existencia de un vínculo de causalidad entre ambos hechos.

a) En cuanto al primer requisito, no es controvertida la efectividad de existir la causa RIT T-1303-2019, tramitada ante el 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, donde la demandante fue ofrecida como testigo, causa en que la denunciada de autos presenta también la calidad de demandada. Tal ofrecimiento probatorio fue señalado por doña Valentina Paz Ortega Cáceres quien demandó a Administradora de Supermercados Hiper Ltda., hecho que consta en el Acta de Audiencia Preparatoria, de fecha **16 de septiembre de 2019**, en causa RIT T-1303-2019.

b) En cuanto al segundo y tercer requisito, no es controvertido que el despido de la demandante ocurrió el **27 de septiembre de 2019**. Sin embargo, lo que podría estimarse un indicio de la represalia que significaría tal decisión de despido del empleador, por razones cronológicas entre ambos hechos, es una apreciación más aparente que real. En efecto, la demandada incorporó como documental *“Copia de correos electrónicos enviados desde el 12 de agosto de 2019 por la casilla krosenberg@tomasello.cl con el asunto “solicita información causa RIT-1303-2019 del 1° Juzgado del Trabajo de Santiago”, hasta el 2 de*



octubre de 2019, fecha en que asunto es “Audiencia Preparatoria causa RIT T-1303-2019 del 1° Juzgado del Trabajo de Santiago”, con correspondientes respuestas”, de cuyo examen queda comprobado que recién el **2 de octubre de 2019** la abogada patrocinante de la demandada en dicha causa judicial, doña Karin Rosenberg Dupré, comunicó a aquella, entre otros antecedentes, que “*los testigos que indicó el demandante son Yenifer Rodríguez, Maritza Cáceres y Oscar Quezada, por lo que les pido me indiquen si es que trabajan o lo hicieron en el local*”. Es decir, la demandada de autos tomó conocimiento que la demandante doña Maritza Cáceres fue ofrecida como testigo una vez que esta ya había sido despedida, por lo que lógicamente el despido en ningún caso puede considerarse una represalia o venganza por tal circunstancia.

No obsta a la conclusión anterior la demás prueba incorporada por la demandante. En efecto, la **prueba confesional** a través de las declaraciones de doña Magdalena Edith Saavedra Garrido, gerente de ventas, en calidad de representante legal de la demandada, no han significado reconocimiento en perjuicio de esta y favorables a las pretensiones de la actora, en relación a la represalia alegada. En relación a la **prueba testimonial**, doña Jenniffer Helen Rodríguez Rodríguez, expuso que trabaja para la compañía y fue compañera de trabajo de la demandante. Dice que era testigo de Valentina (Ortega Cáceres) al igual que la actora. Añade la testigo que fue despedida pero fue reintegrada por el sindicato pero dice que su despido no guarda relación con el despido de Valentina ni de Maritza sino que con otro hecho. Luego se le consulta acerca de la reestructuración del local. Refiere que por ser testigos los persiguen pero que no es amenaza, que les dicen que no vayan a atestiguar porque van a perder su trabajo, sin embargo no especifica quién o quiénes les manifestarían tales presiones. Dice que en su caso fue así pero tampoco añade mayores detalles. Contrainterrogada, manifestó que no las amenazaban por ser testigos, y aclara que quienes les manifestarían las presiones serían la jefas de caja. Dice que es primera vez que declara como testigo en contra de la empresa y que en el juicio de Valentina no la llamaron a declarar. En síntesis, sus declaraciones concretamente nada aportan para esclarecer la posible represalia alegada por la demandante de autos, pues nada refirió acerca de la situación particular de esta. Por su parte, doña Juana Ximena Ramírez Cid, manifestó que trabaja para la demandada hace 16 años, se desempeña como cajera y es delegada sindical. Manifiesta que la demandante era miembro del sindicato. Dice que en septiembre de 2019 después de la huelga hubo muchos despidos en el local, dice que todos los despidos fueron por represalia respecto la huelga. Luego expresa que *supone* que los despidos de septiembre fueron en represalia por la huelga. Señala que todos demandaron a la empresa y que todas las demandas que se hicieron a través del sindicato resultaron favorables al trabajador. Manifiesta que la demandante fue despedida injustificadamente teniendo un fuero que la protege -circunstancia no expresada en la demanda- ella era testigo de su sobrina y que



no la podían despedir porque estaba protegida por la indemnidad. No sabe si el despido de autos guarda relación con el tema sindical a que hizo referencia. Dice que ha habido represalias por ser testigos pero no dice cuándo ni quiénes, salvo el caso de Jennifer Rodríguez, la anterior testigo, pero que fue reincorporada. Señala que no recibió ninguna presión para venir a esta audiencia a declarar. No fue contrainterrogada. Al igual que el anterior testimonio, no aportó antecedentes respecto de la situación personal de la demandante para formar convicción acerca del despido como una represalia.

Siendo de cargo de la demandante aportar prueba tendiente a comprobar sus dichos, que configuren la hipótesis del despido como una represalia del empleador por haber sido ofrecida en calidad de testigo en el contexto de acciones judiciales, se aprecia que su actividad probatoria no consiguió dicho fin. Primero porque la prueba incorporada por la demandada ha permitido tener por establecido que esta tomó conocimiento de la circunstancia de haber sido ofrecida la demandante como testigo en juicio, con posterioridad al despido. Segundo porque la prueba incorporada por la demandante no ha podido desvirtuar tal hecho. Tercero, porque entre el 16 de septiembre de 2019 -fecha en que fue ofrecida como testigo- y el 27 de septiembre de 2019 -fecha de su despido- la prueba tampoco permite tener por establecido que la demandante haya recibido reproches y amenazas de despido o sufriera acoso, tal como se afirma en la demanda. En tal sentido, ambas testigos de su parte nada refirieron acerca de la situación particular de la actora, por tanto esas circunstancias no quedan acreditadas. De las declaraciones de los testigos aportados por la demandada nada se aprecia en sentido diverso al establecido.

En consecuencia, no resulta ser efectivo que la demandada desplegó conductas o adoptó medidas que afectaran la garantía de indemnidad de la demandante en razón de su despido, atendido que no es posible inferir que esta decisión encuentra su motivo en la circunstancia que la actora fuera ofrecida como testigo en el juicio de doña Valentina Paz Ortega Cáceres en la causa RIT T-1303-2019, tramitada ante el 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. Por tales consideraciones, la acción de tutela será desestimada.

QUINTO: Efectividad de los hechos contenidos en la carta de despido.

Que no es controvertida la existencia de una relación laboral desde el día 11 de abril del año 2011, desempeñándose la demandante como vendedora comisionista y que el término de la relación laboral se produce el 27 de septiembre de 2019 por la causal de necesidades de la empresa, artículo 161 del Código del Trabajo. Tampoco es controvertido que la remuneración para efecto de cálculo de prestaciones es de \$564.389.

En cuanto a la efectividad de los hechos contenidos en la carta de despido, corresponde señalar que la demandada no incorporó en juicio la respectiva comunicación de despido, por lo que no es posible conocer su texto y consecuentemente la prueba incorporada por su parte resulta inoficiosa para



valorar y tener por acreditada la veracidad de los hechos contenidos en ella. Por esta sola circunstancia el despido de la demandante será declarado como improcedente y se ordenará el aumento legal del 30%, previsto en el artículo 168 letra b) del Código del Trabajo. Para efectos de determinar su cuantía, el finiquito incorporado por la demandada comprueba que la indemnización por años de servicio que le correspondió a la demandante ascendió a la suma de \$4.515.112, de manera que el aumento legal señalado equivale a \$1.354.533 y que la demandada deberá pagar a la actora.

SEXTO: Aporte del empleador al Seguro de Desempleo. Que la demandante solicita la devolución del descuento efectuado por el empleador en relación a ese concepto, por la suma de \$910.594. Por su parte, la demandada sostuvo que no corresponde la restitución solicitada en razón de haberse aplicado correctamente la causal del inciso primero del artículo 161 del Código del Trabajo. No es controvertido que el monto descontado por concepto de aporte del empleador al seguro de desempleo ascendió a \$910.594, lo que se refleja en el finiquito de contrato de trabajo, suscrito ante Notario Público el 11 de octubre de 2019.

El artículo 13 de la Ley N° 19.728 que “Establece un Seguro de Desempleo”, dispone lo siguiente: *“Si el contrato terminare por las causales previstas en el artículo 161 del Código del Trabajo, el afiliado tendrá derecho a la indemnización por años de servicios prevista en el inciso segundo del artículo 163 del mismo cuerpo legal, calculada sobre la última remuneración mensual definida en el artículo 172 del mismo, con un límite máximo de trescientos treinta días de remuneración, a menos que se haya pactado, individual o colectivamente, una superior, caso en el cual se aplicará esta última”,* agregando en su inciso segundo que *“Se imputará a esta prestación la parte del saldo de la Cuenta Individual por Cesantía constituida por las cotizaciones efectuadas por el empleador más su rentabilidad, deducidos los costos de administración que correspondan, con cargo a las cuales el asegurado pueda hacer retiros en la forma que señala el artículo 15”.*

La referida disposición parte de la base que el contrato de trabajo termine por las causales que indica, de modo que la imputación que se autoriza aplicar a la indemnización por años de servicio, encontrarían su causa en este caso concreto, en el despido fundado en las necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, por lo que se entiende que no basta la mera invocación de la causal sino que esta debe ser homologada judicialmente, esto es, declarándose el despido como procedente. Luego, si esta causal es considerada como improcedente por un Tribunal Laboral de ello se sigue que el fundamento de la citada disposición del artículo 13 carece de causa para los efectos previstos en ella, de modo que no se puede pretender que, existiendo una declaración del despido como improcedente, la imputación del aporte mantenga sus efectos. Y ello también encuentra apoyo en una consideración que se impone por la buena



fe, en el sentido que bastaría para el empleador el solo hecho de invocar la causal de despido en comento para verse beneficiado por la imputación o rebaja, con independencia que después resulte declarado improcedente el despido. En ese sentido, un incentivo económico de esa naturaleza no puede ser amparado jurídicamente, es decir, el empleador al ejecutar un acto contrario a derecho como lo es el despido improcedente, por no verificarse las necesidades de la empresa, no puede favorecerse con el beneficio legal de imputar el saldo de la Cuenta Individual por Cesantía, constituido por las cotizaciones aportadas por su parte.

En consecuencia, estimándose improcedente el despido, como ha quedado establecido en el considerando anterior, no resulta justificado que la demandada haya imputado \$910.594 al pago de la indemnización por años de servicio, a título de su aporte al seguro de desempleo, de manera que se hará lugar a la petición de la demandante ordenándose la restitución de dicha suma por ese concepto.

SEPTIMO: Procedencias de los descuentos efectuados al momento del término de la relación laboral por parte del empleador. Hechos y circunstancias. Que la demandante pretende el reintegro de los descuentos realizados con ocasión del pago del finiquito de fecha 11 de octubre de 2019, en particular por conceptos de *a) Préstamo especial por \$916.251; y b) Préstamo abril por \$24.000*. Alega que su parte, al momento de ratificar el finiquito, debió autorizar expresamente cualquier descuento destinado al pago de tales obligaciones crediticias, haciendo presente que en esa ocasión formuló reserva de derechos para reclamar en sede judicial los cobros de 2 préstamos sociales que había suscrito con su ex empleadora, los cuales se habían pactado en cuotas mensuales. Por su parte, la demandada sostiene que no procede realizar ninguna devolución ya que los descuentos fueron debidamente hechos.

Sin perjuicio de no existir controversia acerca de los montos descontados y su causa, valga señalar que conforme al finiquito suscrito por las partes consta que la demandada descontó por concepto de *“Prest. Marzo en \$ Finiq”* la suma de \$24.000, y en razón de *“Ptmo. Especial en \$ Finiq”*, dedujo la suma de \$916.251.

La demandada incorporó la *copia de autorización de descuento préstamo de fecha 2 de septiembre de 2019, firmado por la demandante*, no objetado por esta, el que es de fecha 2 de septiembre de 2019 e indica que la demandante recibió un préstamo especial de parte de la demandada por la suma de \$916.251, pagadero en 21 cuotas mensuales de \$43.631 cada una, declarando la demandante en forma expresa que se hará responsable y autoriza a su empleador a descontar mensualmente de su remuneración *o de su eventual finiquito los saldos insolutos o el crédito que estoy solicitando*. De acuerdo al mérito de tal documento, fue la propia demandante quien autorizó expresamente y de manera anticipada el descuento destinado al pago de la obligación crediticia asumida, por lo que el descuento de la suma \$916.251 en el finiquito corresponde precisamente a lo pactado, no correspondiendo devolución alguna en los términos solicitados en la demanda, teniendo además presente que el despido ocurrió con fecha 27 de



septiembre de 2019 sin que la demandante haya alcanzado a pagar la primera cuota.

Respecto del descuento por \$24.000, la demandada no incorporó ningún documento que lo justifique, de modo que se estimará como improcedente y se ordenará su restitución.

OCTAVO: Valoración de la prueba. Que para arribar a las conclusiones precedentes, la prueba incorporada por las partes ha sido apreciada con sujeción a las reglas de la sana crítica, desestimándose en su fuerza probatoria los demás medios de prueba que también fueron individualizados en los considerandos segundo y tercero anteriores, pero que no fueron mencionados expresamente en los siguientes considerandos de esta sentencia, toda vez que el mérito probatorio de cada uno de ellos no logra alterar en nada lo que se viene decidiendo y se dirá en lo resolutive. En cuanto a la solicitud de la demandante, de hacer efectivo el apercibimiento legal a propósito de la no exhibición de documentos por la demandada, todos referidos a la procedencia de la causal de despido, se hace presente que se trata de una facultad del Tribunal, la que se estima innecesaria ejercer toda vez que los antecedentes expuestos en los considerandos precedentes han sido suficientes para tener por acreditado que el despido fue improcedente, y con ello decidir como se expresará en lo resolutive.

NOVENO: Costas. Que cada parte pagará sus costas.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 4, 5 a 11, 21, 33, 41, 42, 44, 45, 54 a 58, 73, 161 inciso 1°, 162, 163, 164, 168, 420, 423, 425 a 431, 432 a 438, 446 a 462, 485 y siguientes del Código del Trabajo; artículos 1°, 2°, 5° y 13 de la Ley N° 19.728 que Establece un Seguro de Desempleo; se resuelve:

I) En cuanto a la denuncia de tutela laboral:

- Que se rechaza la denuncia de tutela laboral interpuesta en lo principal por doña MARITZA VERONICA CACERES ROMERO, en contra de la sociedad ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA, representada por don Manuel López Barranco, y se declara que esta no ha incurrido en la vulneración de la garantía de indemnidad denunciada.

II) En cuanto a la demanda subsidiaria:

- Que se acoge parcialmente la demanda subsidiaria por despido improcedente y cobro de prestaciones e indemnizaciones, interpuesta por doña MARITZA VERONICA CACERES ROMERO, en contra de la sociedad ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA, representada por don Manuel López Barranco, y se declara:

a) Que el despido de la demandante fue improcedente y, en consecuencia, la demandada deberá pagar el aumento legal del 30% sobre la indemnización por años de servicio, correspondiente a la suma \$1.354.533.

b) Que la demandada deberá restituir a la actora la suma de \$910.594, que fuera descontada en razón de su aporte a la Cuenta Individual por Cesantía de la demandante.

c) Que la demandada deberá restituir a la demandante la suma de \$24.000, en razón de descuento improcedente.

d) Que se rechaza la demanda en lo demás.

III) Que las sumas que se ordena pagar se reajustarán y devengarán el interés que corresponda, de conformidad a los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo.

IV) Que cada parte pagará sus costas.

V) Ejecutoriada que se encuentre esta sentencia, cúmplase lo dispuesto en ella dentro de 5° día hábil, de lo contrario y previa certificación pasen los antecedentes para su cumplimiento compulsivo.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

RUC: 19-4-0233349-1

RIT: T-1968-2019

Pronunciada por don Jorge Luis Escudero Navarro, Juez suplente del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

En Santiago, a veintiocho de diciembre de dos mil veinte, se notificó por el Estado Diario la resolución precedente.

